

EE. UU.: Jesuitas publican lista de acusados de abusos a menores

Los jesuitas del estado de Maryland, Estados Unidos, publicaron ayer varias listas de implicados en supuestos abusos a menores, algunos de ellos en activo y otros que han fallecido. "Hoy, la Provincia de Maryland de la Compañía de Jesús está publicando los nombres de los Jesuitas de nuestra provincia, y otros jesuitas que han servido a la pro-

vincia, que han sido acusados creíblemente de abusos sexuales a menores desde 1950", dijo esta institución en un comunicado en su página web. El órgano puso tres listas en su sitio de internet, donde aparecen los nombres de diecinueve religiosos que supuestamente cometieron los abusos, algunos de ellos fallecidos, y cinco sospechosos de haber ejecutado ese tipo de actos. Los jesuitas están tratando de tomar más medidas en el tema. P. Scott Santarosa, superior provincial de la Compañía de Jesús en el oeste de Estados Unidos, dijo que quienes se hayan sentido victimizados por un jesuita pueden contactar a Mary Pat Panighetti al correo mppanighetti@jesuits.org.

ber ejecutado ese tipo de actos. Los jesuitas están tratando de tomar más medidas en el tema. P. Scott Santarosa, superior provincial de la Compañía de Jesús en el oeste de Estados Unidos, dijo que quienes se hayan sentido victimizados por un jesuita pueden contactar a Mary Pat Panighetti al correo mppanighetti@jesuits.org.



DESDE EL SUR
BEATRIZ MIRANDA

COP 24

El 15 de diciembre de 2018, después de 13 días de intensas negociaciones, representantes de 197 países clausuraron la Conferencia del Clima de la Organización de las Naciones Unidas (COP 24) con un "Libro de Reglas", que será la hoja de ruta para poner en marcha el Acuerdo de París con el objetivo de afrontar el calentamiento global.

El acuerdo final presentado en Polonia se refiere al informe científico que insta a la comunidad internacional a la realización de "cambios urgentes y sin precedentes" para limitar el incremento de temperatura del planeta en 1,5 grados Celsius.

En la Cumbre se notó la poca importancia que los países árabes han dado a los últimos informes sobre el clima y, por consiguiente, la renuencia de algunos de ellos a cumplir las metas climáticas y dar pasos más audaces hacia el uso de energías renovables.

Muchos economistas climáticos proponen reformas globales con el objetivo de institucionalizar un impuesto al CO2 ligado a la baja de otros impuestos que incentiven tecnologías limpias. Si el presidente Trump fue el protagonista de la Cumbre de Marrakech en 2016, cuando anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, en Polonia, el efecto Bolsonaro ya se empezó a sentir: Brasil renunció a ser sede de la 25 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Mudanza Climática (COP 25), debido a su alto costo.

Brasil ha sido históricamente un importante negociador del tema. Fue sede de las Conferencias de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Eco 92) en 1992, Desarrollo Sostenible (Río + 20) en 2012 y jugó un importante papel en las negociaciones del Acuerdo de París en 2015.

Por cuestiones de alternancia geográfica, la COP 25 debería ser realizada en América del Sur y el Caribe. Después de la renuncia de Brasil, Costa Rica, Guatemala y Chile se apuntaron como posibles anfitriones. El viernes, Chile declaró que será sede del evento.

Con la retirada de Estados Unidos, el paso hacia atrás de Brasil y una Europa dividida con relación al tema climático, hacen falta líderes y mediadores.

Con todo, la COP 24 rescató el Acuerdo de París, recordó la importancia del multilateralismo y de los derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas, para afrontar el populismo de derecha y su avalancha conservadora.

Deseo un 2019 más solidario, humano y sostenible con menos dolor de los inmigrantes y mayor preservación de la Amazonia.

Profesora U. Externado.

Internacional



Cientos de nicaragüenses protestan en Costa Rica contra las prácticas de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo. / AFP

Crece represión en Nicaragua

Lo que Daniel Ortega le aprendió a Somoza

A pocos días de que termine 2018, la crisis nicaragüense se agrava: aumenta la violencia del Gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

El jueves Nicaragua vivirá otra jornada de huelga ciudadana. Ese día la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó una huelga de 24 horas que exigirá la salida del poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La liga, creada en octubre pasado, está conformada por movimientos y asociaciones estudiantiles, políticas, académicas, profesionales, feministas, campesinos y empresarios.

Este es el cuarto paro convocado este año para exigirle al Gobierno el final de la represión, la libertad de los presos políticos y

el respeto de los derechos humanos. Y es que el país entró en una profunda crisis desde el 18 de abril, cuando una ley para cambiar el sistema de seguridad social provocó masivas protestas.

Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por las fuerzas gubernamentales dejando, hasta ahora, un saldo de 325 a 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos. Lo grave es que el Gobierno arremetió la arremetida. El Parlamento de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de cinco ONG, lo que elevó a nueve las organizaciones que han sufrido sanciones en

las últimas dos semanas.

El Legislativo nicaragüense suprimió el estatus legal a esas organizaciones sobre la base de un informe del Ministerio de Gobernación, que las acusa de formar

» Chile, Panamá, la Unión Europea, Estados Unidos y Costa Rica se pronuncian sobre las acciones de Ortega contra las Organizaciones no Gubernamentales.

parte de un grupo de ONG que apoyó "el fallido intento de golpe de Estado", como el Ejecutivo se refiere a las manifestaciones antigubernamentales.

No solo eso, un grupo de medios de comunicación denunciaron haber sido allanados sin orden judicial la semana pasada y ayer informaron que los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) siguen ocupando de forma ilegal la redacción de *Confidencial* y "Esta Semana".

El Gobierno Ortega-Murillo asocia a Invermedia y Promedia —empresas productoras de *Confidencial* y los programas televisivos "Esta Semana" y "Esta Noche"— con el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea.

Atacar a la prensa, condenar a los opositores, matar a quienes protestan, perseguir a jerarcas de la Iglesia críticos con el Gobierno, allanar organizaciones críticas y violar derechos humanos eran prácticas que Nicaragua no veía desde que cayó la dictadura de Anastasio Somoza.

La ironía es que quien derrocó al dictador, en julio de 1979, es el verdugo de un pueblo que pide a gritos un cambio. ■